

Informe Fundación BBVA-Ivie Crecimiento y competitividad 2013. Los retos de la recuperación

España necesita acometer cambios en las empresas, la educación y el sector público para crecer y crear empleo, reduciendo los riesgos de exclusión laboral y pobreza

- El Informe señala los retos a corto y medio plazo a los que debe responder la economía española para consolidar la recuperación y propone quince líneas de actuación.
- Para que España pueda alcanzar un desarrollo duradero tiene que impulsar un crecimiento generador de empleo e incluyente, y promover una competitividad avanzada y estable.
- Las inversiones en activos intangibles, pese a ser esenciales para aprovechar mejor los recursos humanos y de capital, suponen en España solo un 40% de las que se dedican a tangibles, frente al 150% en Estados Unidos.
- Las amplias dotaciones de infraestructuras, la oferta de mano de obra abundante y cualificada, los niveles de productividad y costes actuales hacen de España un territorio atractivo para localizar actividades intensivas en conocimiento.
- La creación de puestos de trabajo y las políticas activas de empleo, en especial la formación, son claves para lograr un crecimiento incluyente, pero también para la mejora de las empresas, ya que solo un 10% de los empresarios tiene formación universitaria.
- Competir y crecer mejor exige desplegar una estrategia inteligente que responda a una visión amplia de los problemas y los objetivos sociales y económicos colectivos.

Madrid, 11 de diciembre de 2013.- La economía española ha salido de la recesión, pero no de la crisis. Para dejarla atrás es necesario abordar, a corto y a medio plazo, numerosos retos que exigen cambios de gran calado en las empresas, en la educación y en el sector público. Solo de ese modo mejorará la competitividad del tejido

productivo y la eficiencia de las instituciones y empresas, ayudando a crecer más y mejor, y a reducir los riesgos de exclusión laboral y social existentes. Así lo indica el tercer **Informe 2013 Fundación BBVA-Ivie sobre Crecimiento y competitividad**, enmarcado en el Programa de Investigaciones Económicas que desde hace casi dos décadas desarrollan conjuntamente ambas instituciones. El Informe ha sido elaborado por un equipo de investigadores y técnicos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), y dirigido por Francisco Pérez, Catedrático de la Universidad de Valencia y director de investigación del Ivie.

Tras nueve trimestres consecutivos de variación negativa del PIB, España ha vuelto a lograr una modesta tasa de crecimiento positiva que, previsiblemente, se irá afianzando en 2014. El principio de la recuperación es resultado de medidas de choque frente a situaciones críticas que han logrado avances en la corrección de desequilibrios macroeconómicos en el sector exterior y en el financiero. Se han reducido las tensiones que mantuvieron a la economía al borde del precipicio, se han abierto algunas ventanas de financiación en los mercados mayoristas y el déficit estructural del sector público se ha reducido sustancialmente. Se aprecia un claro avance en los ajustes de los precios relativos internacionales, en el equilibrio comercial y en el saldo financiero exterior. De todas estas mejoras se deriva una mayor confianza externa en la economía española que se traduce en indicadores puntuales, pero que puede desviar la atención de un diagnóstico en perspectiva de los problemas estructurales que han marcado el perfil distintivo de la crisis española respecto a las de otros países.

A partir de amplias series temporales, el estudio analiza los factores propios de la crisis española, a la vez que aporta claves sobre cómo abordarlos para consolidar la recuperación, dejar atrás la crisis y evitar posibles recaídas.

La confianza externa que en los últimos meses ha ganado la economía española encuentra dificultades para trasladarse al interior debido a la gravedad de los problemas pendientes de resolver en ámbitos clave para la mayor parte de la población y de las empresas: el desempleo, la escasez de crédito, el bajo nivel de utilización de la capacidad productiva, el todavía elevado nivel de endeudamiento y los desequilibrios presupuestarios. La solución de estos problemas marcará el paso de la salida de la recesión a la superación de la crisis. Los autores del Informe insisten en la necesidad de un crecimiento incluyente, y advierten que si no se actúa frente al desempleo masivo y continuado y el riesgo de pobreza, la recuperación no se consolidará.

Superar la crisis: los retos de la recuperación

Para dejar atrás la crisis se requiere que el crecimiento vuelva a ser vigoroso y duradero, y se genere empleo a un ritmo que permita corregir de manera socialmente perceptible el enorme paro existente.

El Informe señala dos grandes objetivos para que España pueda competir en el mundo actual y alcanzar una etapa de desarrollo duradero: **promover una competitividad avanzada y duradera, e impulsar un crecimiento generador de empleo e incluyente**. Los autores advierten de que algunas de las actuaciones necesarias no están recibiendo la

atención que merecen por parte de los programas de reformas, ni tampoco por los agentes sociales y la opinión pública.

Para alcanzar esos objetivos, los autores definen una serie de retos y proponen líneas de actuación encaminados a cambiar el patrón de capitalización y adaptarlo al actual escenario competitivo, apoyándose más en activos intangibles que en inversiones materiales, y aprovechar las oportunidades que ofrece la fragmentación internacional de las cadenas de producción y la deslocalización de actividades. Asimismo, para que el crecimiento sea socialmente sostenible e inclusivo, se insiste en la necesidad de minimizar el riesgo de pobreza y exclusión social que representa el desempleo masivo y duradero.

Causas, consecuencias y costes de la crisis

La crisis ha sido mayor en España debido a que las características de su tejido productivo y su mercado laboral hicieron a la economía menos competitiva. Rasgos destacados de esa debilidad han sido la escasa orientación de las inversiones a los activos y productos ligados al conocimiento, el escaso aprovechamiento del capital humano, las carencias de formación de numerosos empresarios, el excesivo endeudamiento y la ausencia de suficientes empresas de gran tamaño.

La consecuencia más negativa de las dos intensas recesiones padecidas es el prolongado desaprovechamiento de buena parte de nuestros recursos humanos y de capital. Son manifestaciones de ello la elevada tasa de desempleo, el limitado rendimiento del capital humano y la baja utilización del capital físico acumulado (infraestructuras de transporte, naves y suelo industrial, oficinas, fábricas, plantas, equipos de transporte y energía, etc.). La situación se agrava por la escasez y el coste del crédito bancario, derivados del retroceso de la integración financiera de la zona euro.

- Como resultado del bajo nivel de actividad, el desempleo es masivo -afecta especialmente a los jóvenes y a las personas con menor cualificación- y comporta riesgos de exclusión laboral graves, una alta probabilidad de dependencia de las políticas de protección social y mayor riesgo de pobreza.
- **La renta per cápita ha retrocedido a los niveles de hace una década**, el número de personas y familias situadas en los niveles de renta más bajos ha aumentado, y el porcentaje de población que padece riesgo de pobreza o exclusión social ha alcanzado el 28%.
- **La carga de la crisis está siendo mayor para los estratos de ingresos más bajos**, los más afectados por la destrucción de empleo, mientras que las personas situadas en los escalones de mayor renta han tendido a mantener sus posiciones.
- Estos **costes de la crisis han sido paliados, en parte, por las transferencias monetarias y los servicios públicos**, pero no hasta el punto de evitar el aumento de la desigualdad y el riesgo de pobreza.

Devaluación interna y sus daños

Los avances en la **corrección de los desequilibrios se han producido mediante un proceso de devaluación interna que ha mejorado la competitividad más rápidamente de lo esperado, obligando a empresas y trabajadores a revisar precios, salarios y otros costes.**

- Esos cambios han representado **una destrucción de 3,7 millones de empleos** que parece estar tocando fondo en la segunda mitad de 2013, coincidiendo con la salida de la recesión.
- Las respuestas a la situación de paro masivo son numerosas: la prolongación de los estudios, la emigración y el autoempleo, el desánimo y la retirada del mercado de trabajo y, progresivamente, la reducción de los salarios reales.
- La falta de horizontes de progreso ha desembocado en un deterioro muy grave de las expectativas económicas de la población y su confianza en la capacidad de las instituciones de responder a los problemas colectivos, que se ha visto acentuado por casos relevantes y abundantes de corrupción política.

Se ha generado un clima de **desconfianza social** en la capacidad de afrontar el futuro, que se manifiesta como un contrapeso pesimista a los deseos de que la recuperación se confirme y tome fuerza en los próximos trimestres. De hecho, según datos del estudio Values and Worldviews realizado por la Fundación BBVA este mismo año, España se distancia del promedio europeo por un nivel de confianza mucho más bajo en la mayoría de sus instituciones. Solo las universidades, las organizaciones no gubernamentales y las empresas nacionales aprueban en una escala de 0 a 10 en la confianza entre los españoles.

La senda de la recuperación: retos a corto y medio plazo

El principal reto a corto plazo para cambiar la atmósfera de desconfianza interna es intensificar el crecimiento y volver a crear empleo. Para conseguirlo es urgente que vuelva a fluir el crédito, avanzar en la corrección del déficit público y mejorar las posiciones financieras de empresas y familias. La suavización de las tensiones financieras en 2013 representa un importante avance en este terreno, pero es preciso que se confirmen otros progresos como la reducción del déficit público y el desapalancamiento de empresas y familias. De confirmarse, facilitarán la recuperación de la confianza, impulsarán la demanda interna y mejorará la utilización de la capacidad instalada, estimulando el consumo y la inversión.

El Informe Fundación BBVA-Ivie identifica ocho retos cuya superación hará más probable que la competitividad sea duradera, por formar parte de una estrategia de desarrollo avanzado. **El objetivo de los retos a medio plazo es competir y crecer mejor, es decir, lograr un crecimiento sostenible e incluyente que reduzca los riesgos actuales de dualización laboral y exclusión social.**

Competir mejor: una estrategia de desarrollo avanzado

España no puede basar su competitividad solo en una **estrategia** de ajustes de costes, ha de apoyarse también en **la mejora de su capacidad de generar valor añadido mediante un mejor aprovechamiento de sus recursos productivos**. Los retos para lograr ese objetivo han de ser abordados fundamentalmente por el sector privado -las empresas, los trabajadores, las familias-, aunque el sector público debe actuar como impulsor de algunos cambios.

El primer reto es el cambio del patrón de inversión, para basar mucho más la acumulación de capital en los activos intangibles; información digitalizada, innovación y competencias económicas que potencien la imagen de marca, mejoras en la gestión, en la organización del trabajo y formación. La prioridad ahora no es aumentar las dotaciones de capital físico por ocupado sino el uso de la capacidad infrautilizada y del capital humano. **La pobre trayectoria de la productividad en el pasado indica que el potencial productivo español no está bien utilizado** y el reto es generar empleo productivo e invertir para mejorar la productividad del trabajo y del capital. Los intangibles ya favorecen esta tarea en los países que mejor respuesta dan a la crisis: los que invierten más en I+D y en la mejora del funcionamiento de sus empresas.

La inversión en intangibles en España es baja -menos del 40% de su inversión en activos tangibles, cuando en Estados Unidos representa un 150% de los tangibles- y su composición no es la más adecuada. **Las mayores debilidades se encuentran en el reducido peso de la I+D y los gastos en la mejora del funcionamiento interno de las empresas (organización empresarial), incluida la formación de los trabajadores en el puesto de trabajo.** Los niveles educativos de muchos trabajadores son bajos y el elevado grado de temporalidad se asocia a esa debilidad, pero también hay graves carencias de formación en muchos empresarios. En España el 45% de los autónomos y el 38% de los empresarios con asalariados solo tienen estudios obligatorios en 2013. Estos datos contrastan con la media de la Unión Europea en 2012, donde los porcentajes se reducen al 25% entre los autónomos y el 19,3% de entre los empresarios con asalariados.

Un segundo reto destacado por el Informe es el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen la fragmentación de las cadenas de suministros y la internacionalización. La economía española ha de orientar más sus actividades hacia las que generan más valor, teniendo presente que la economía mundial se caracteriza por una elevada fragmentación de los procesos productivos que permite a las empresas especializarse en distintas tareas. En ese contexto, **es muy importante que la especialización aproveche las ventajas de la externalización y de la internacionalización de actividades** -mediante el *outsourcing* internacional o la inversión directa en el exterior- como ya hacen las grandes empresas.

El debate sobre las ventajas de la reindustrialización no debe ignorar que la fragmentación de actividades desdibuja las fronteras entre la industria y los servicios y aumenta el peso de estos últimos en el valor de la producción manufacturera. Así,

cuando aumenta la producción de manufacturas, el 50% del empleo adicional generado es empleo terciario, y solo el 39% es industrial. Asimismo, aunque la gran mayoría de las exportaciones brutas son manufactureras, más del 50% del valor añadido generado en las mismas corresponde a los servicios.

La fragmentación y la deslocalización plantean el reto de reducir los costes en tareas de baja cualificación y centrarse en las más cualificadas. Pero las empresas que se abastecen solo en los mercados locales se resienten del coste que representa aprovisionarse de servicios generados con bajos niveles de productividad. Las empresas españolas menos internacionalizadas padecen estos inconvenientes en mayor medida y también los derivados de **un marco regulador injustificadamente fragmentado** por las normativas regionales o locales, que **no favorece la creación y funcionamiento de las empresas en el mercado interior ni tampoco su presencia en el exterior**. La reciente Ley de Unidad de Mercado representa el primer paso para corregir esta fragmentación.

Un tercer reto para España es atraer inversión extranjera, poniendo en valor sus ventajas competitivas ante las estrategias de deslocalización de empresas foráneas. Muchas multinacionales ubicadas en el país confirman con su permanencia que España es un territorio atractivo en el que es posible alcanzar niveles competitivos de productividad y costes, en especial tras las caídas de precios de los últimos años. Dada la abundante oferta de recursos existente, los procesos de deslocalización son una oportunidad para atraer empresas y proyectos hacia España.

La inversión directa del exterior se ha visto afectada por la crisis pero, afortunadamente, en 2013 se está recuperando y debería crecer mucho más. Ya la inversión en cartera del exterior en España muestra también un punto de inflexión que denota mayor confianza de los inversores., Las dotaciones de infraestructuras y oferta de mano de obra abundante de cualificación alta y los salarios, además de los costes del suelo y alojamiento que son más bajos que los de muchas economías europeas, deben servir para que determinadas actividades se localicen en España. Esta inversión exterior permitirá valorar más las fortalezas competitivas ahora desaprovechadas que pueden contribuir a reducir nuestro endeudamiento exterior y a generar empleo.

Un cuarto reto es abordar cambios en la estructura, dirección y gestión de muchas empresas, en especial de las más pequeñas. Las estrategias empresariales dependen con frecuencia de propietarios con escasa cualificación para manejar la actual complejidad tecnológica de las organizaciones y de los mercados. Mientras el 71,1% de los directivos son universitarios, ese porcentaje se reduce al 10,5% entre los empresarios con asalariados y al 10,3% entre los autónomos, pero estos dos últimos grupos son los mayoritarios. Los gestores profesionales no solo parten de niveles de formación más elevados, sino que se reciclan con mucha más frecuencia. Un reflejo de esas carencias formativas en muchas empresas españolas es que usan con poca frecuencia las técnicas avanzadas de gestión -una cuarta parte no utiliza ninguna de esas técnicas- siendo este problema mayor en las empresas familiares. Las empresas grandes y las multinacionales, gestionadas con frecuencia por directivos profesionales, logran mayores niveles de eficiencia y productividad.

El quinto reto para mejorar la competitividad es el aumento de la productividad del trabajo y la formación de los trabajadores. La tendencia actual de la productividad del trabajo es positiva, pero debe continuar cuando la economía sea capaz de crear empleo. Para ello será necesario incrementar las ocupaciones cualificadas, que quienes ocupan estos puestos estén bien formados y sean productivos, y que las empresas gestionen esos recursos adecuadamente. Aunque **en España el porcentaje de puestos de trabajo de alta cualificación representa ya alrededor de un tercio del total, en otros países esa cifra se aproxima al 45%**. Las previsiones europeas son que dos de cada tres puestos de trabajo creados en España en esta década sean cualificados, y por ello es necesario contar con abundantes recursos humanos con formación superior (universitaria o profesional), con conocimientos, competencias y actitudes adecuados para cubrir una demanda cada vez mayor de capital humano.

El desafío es que la formación sea el complemento del cambio de especialización productiva y se adapte a las necesidades de unas empresas mucho más basadas en el conocimiento. La formación dual es más relevante en este contexto, pues la adquisición de capital humano en el seno de las empresas es más importante cuando éstas usan intensamente el conocimiento.

Crecer mejor, minimizando los riesgos de exclusión

Salir de la crisis requiere crecer más pero también lograr que los frutos del crecimiento eviten algunos de los riesgos de exclusión laboral y social actualmente existentes. En ese sentido, España se enfrenta a desafíos muy relevantes que es necesario tener presentes.

El sexto reto –primero en este ámbito y el más importante para el resto de esta década– será absorber una gran bolsa de parados con escasa formación, pues la exclusión laboral está siendo un factor clave del mayor riesgo de pobreza. Es necesario contemplar todo el arsenal disponible de medidas para paliar el problema que representa el desempleo: aprovechar con decisión el potencial flexibilizador del nuevo marco surgido de las últimas reformas del mercado de trabajo para facilitar en la medida de lo posible la creación de empleo; estimular y completar estas medidas por las vías que contempla la Ley de Emprendedores, y ofrecer segundas oportunidades formativas a los menos cualificados. Las cifras de desempleados no cualificados y las de formación continua no dejan lugar a dudas sobre la insuficiencia de las respuestas dadas a este problema: **quienes más complementos de formación necesitan para mejorar su empleabilidad son los que menos cursos realizan, e incluso lo hacen con menor intensidad que antes de la crisis.**

En los años recientes de fuerte destrucción de puestos de trabajo **se ha hecho mucho más relevante el papel redistributivo de los ingresos y, sobre todo, de los gastos públicos.** La contribución neta del sector público a los hogares (tras el pago de impuestos, el cobro de transferencias y el acceso a los servicios públicos) ha pasado de representar el 2,8% del PIB al 12%, **debido a la mayor importancia de las transferencias por desempleo y pensiones, y de la educación y sanidad públicas, en relación con las menores rentas privadas.**

Un séptimo reto es garantizar el acceso a servicios públicos fundamentales como la educación y la salud, claves para igualar las oportunidades de los grupos sociales más amenazados por la pobreza. El papel del sector público es decisivo para garantizar la financiación de esos servicios en condiciones que favorezcan la equidad. Buena parte del debate se ha centrado en discutir quién debe producir los servicios, pero los principales retos de futuro en relación con la igualdad de oportunidades en España son tres: la sostenibilidad financiera del gasto público a medio y largo plazo, amenazada por la tendencia expansiva de los gastos asociados al envejecimiento; la existencia de grandes diferencias de recursos por habitante entre las comunidades autónomas, responsables de la prestación de estos servicios; y la falta de instrumentos de evaluación sistemática de los resultados de las políticas educativas y sanitarias, que promueva la difusión de buenas prácticas y la eficiencia.

El octavo reto para la calidad del crecimiento es hacer eficientes los servicios públicos, como ponen de manifiesto las actuales dificultades financieras. Si no se prestan de manera eficiente, minimizando costes y maximizando el volumen y calidad de los mismos, los problemas de sostenibilidad financiera se harán más presentes. Sin embargo,

la escasa tradición de orientar la gestión pública en esa dirección y las urgencias de los ajustes presupuestarios, hacen que muchas reformas no tengan claras hojas de ruta de mejora de la eficiencia. Los retos en este terreno son importantes pues el sector público se enfrenta a un horizonte restrictivo duradero y si no logra mejorar su eficiencia lo sufrirán los ciudadanos. **El actual Programa Nacional de Reformas adolece de una carencia de fondo** que viene afectando a todas las actuaciones en este terreno: **la falta de una apuesta clara por la evaluación sistemática ex-ante y ex-post de las políticas, basada en sistemas de información adecuados.**

Propuestas de actuación

Las quince propuestas del Informe Fundación BBVA-Ivie 2013 se agrupan en torno a la competitividad y el crecimiento. El objetivo no es solo competir más, sino también mejor, sobre pilares que hagan la competitividad duradera y sirvan de base a una estrategia de desarrollo avanzado que evite que se agraven los riesgos de dualización laboral y exclusión social.

Mejora de la competitividad

Las diez propuestas del Informe FBBVA-Ivie para la mejora de la competitividad requieren cambios en las empresas y en las actividades dedicadas a la formación. Se trata de **cambios imprescindibles para que el tejido productivo modifique su composición y ganen peso las empresas y actividades intensivas en conocimiento**, haciéndoles capaces de afianzarse en los mercados internacionales como ya hacen las mejores compañías españolas.

1. Promover la inversión en intangibles

Es necesario concienciar y sensibilizar a quienes toman decisiones en las empresas de que los activos intangibles son especialmente productivos. España necesita extender sustancialmente por todo su tejido productivo el uso intensivo de la información digitalizada, la I+D, el diseño de nuevos productos, la investigación de mercados, la organización empresarial y la formación en la empresa.

2. Formación continua para empresarios: Pymes y autónomos

Como complemento fundamental a la inversión en intangibles se necesita impulsar decididamente la formación continua de los empresarios y los autónomos, y la profesionalización de la gestión mediante la contratación de directivos y su formación a lo largo de la vida profesional. La escasa formación de quienes toman decisiones representa un riesgo financiero, más elevado en los empresarios autónomos que inician actividades sin un apoyo adecuado.

3. Formación empresarial para titulados superiores

Promocionar el capital humano de mayor cualificación a los puestos de decisión de las empresas mediante la contratación como directivos de titulados superiores, el fomento

de las vocaciones empresariales y la formación como emprendedores de parte de los universitarios, para lo que se requiere una colaboración estrecha entre empresas y universidades.

4. Apoyo a la exportación y a la internacionalización

Extender las ventajas y oportunidades de la internacionalización asociadas a la fragmentación de las cadenas de producción mediante programas de formación y el desarrollo de instrumentos financieros adecuados -créditos, avales- para abordar proyectos cuya maduración puede ser larga, elevando por esa vía el número de empresas españolas que acceden a los mercados internacionales. Aprovechamiento del creciente número de universitarios españoles en países desarrollados.

5. Atraer inversión extranjera directa

Atraer a España actividades y fragmentos de las cadenas de producción en las que tenemos ventajas competitivas mediante la difusión entre los inversores internacionales de nuestras ventajas de coste y oferta de recursos. Facilitar con complementos de formación la empleabilidad de los recursos humanos, y abordar de una vez las reformas necesarias para crear un entorno favorable a las empresas.

6. Retener y recuperar talento

Para tener incentivos a retener y recuperar el talento las empresas han de aumentar el volumen de actividades de intensidad tecnológica, media y alta, mediante el empleo creciente en los puestos directivos, técnicos y profesionales de personas con la titulación adecuada. Ese proceso ha de ser facilitado por las instituciones de educación superior, mejorando la empleabilidad de los titulados.

7. Apoyo selectivo a la I+D+i

Reforzar la presencia del conocimiento en la sociedad y la economía mediante la mejora de la formación de los formadores, la generación de nuevos conocimientos y su uso por las empresas. En las actividades de I+D, seriamente afectadas por la crisis, se requieren apoyos selectivos -públicos y privados- basados en la capacidad de producir resultados y transferirlos al tejido productivo.

8. Flexibilidad, interna y externa

Promover un cambio cultural -entre los empresarios, los trabajadores, los asesores, los jueces- hacia la *flexiseguridad*, es decir, a favor de la mejora de la capacidad de adaptación de las empresas y de la flexibilidad tecnológica de sus organizaciones y empleados, acompañada de garantías de seguridad para los trabajadores en la aplicación de la regulación.

9. Prioridades en el gasto público

La estabilidad presupuestaria contribuirá más a la competitividad si va acompañada de una priorización de gastos adecuada, con horizontes de largo plazo. Se necesita

preservar la regularidad del esfuerzo inversor del sector público en capital humano, infraestructuras e intangibles, y definir políticas de Estado en los ámbitos que son prioritarios, protegiéndolas del ciclo económico y del ciclo político.

10. Evaluación de políticas

Extender las prácticas de evaluación de las políticas públicas en España para mejorar la información, la transparencia y la confianza en su calidad que se deriva de la competencia profesional de quienes las diseñan y analizan, como ejemplo del buen gobierno de los asuntos públicos.

Un crecimiento incluyente

La mejora de la competitividad española puede requerir medidas que tengan efectos negativos sobre grupos sociales con desventajas competitivas en los mercados de factores actuales, como los trabajadores menos cualificados que se enfrentan a las mayores tasas de paro. Es peligroso ignorar los riesgos que representa para el desarrollo a largo plazo no lograr un crecimiento incluyente, de cuyos frutos participe toda la población. Por esa razón, los autores del Informe consideran necesario que la agenda de las políticas a favor de la competitividad vaya acompañada de cinco actuaciones que corrijan o amortigüen sus potenciales efectos negativos sobre los más débiles.

11. Políticas activas de empleo ambiciosas

Es imprescindible desplegar acciones especiales de formación y fomento del empleo (información de oportunidades, mejora de la gestión de la intermediación y fomento del trabajo a tiempo parcial) dirigidas a los desempleados menos cualificados, para reducir la exclusión laboral y la dependencia de los subsidios públicos o la asistencia social privada. Impulso a las iniciativas de emprendimiento acompañado de apoyo formativo que reduzca el riesgo de promover proyectos inviables a medio plazo.

12. Comprometer a toda la sociedad en la formación de los parados

Se necesita movilizar los recursos del sistema educativo reglado y no reglado, de las empresas y de los medios de comunicación, para el reciclaje de personas con carencias básicas en comprensión lectora y matemáticas, idiomas e informática y así evitar la exclusión laboral. El sistema educativo puede ofrecer sus instalaciones y profesionales, las empresas pueden orientar a los desempleados sobre qué demanda el mercado de trabajo, y los medios de comunicación y las nuevas tecnologías permitir llegar a audiencias muy amplias.

13. Reforma fiscal y lucha contra el fraude

El sistema fiscal español debe convertirse en un conjunto de impuestos coordinados, comprensibles y con mayor capacidad recaudatoria. Debe abordarse una simplificación de los impuestos, ampliando las bases y eliminando deducciones sin poner

en peligro la recaudación, y luchar contra el fraude, mejorando la coordinación internacional y la corresponsabilidad interterritorial de las distintas administraciones.

14. Garantizar el acceso a los servicios públicos fundamentales

Garantizar el acceso a los servicios públicos fundamentales a todas las personas, con independencia de su lugar de residencia, en especial a las que padecen riesgo de pobreza. Ajuste de las políticas de tasas y copagos orientadas a incentivar la corresponsabilidad para evitar un acceso restringido a ciertos colectivos.

15. Garantizar la sostenibilidad financiera del sector público

Garantizar la sostenibilidad financiera del sector público con reformas de sus ingresos y reglas de gasto para seguir manteniendo las funciones básicas de pensiones y sanidad al servicio de todos los ciudadanos, en particular en la cobertura de riesgos individuales y en la igualdad de oportunidades también para las generaciones futuras.

Fundación **BBVA**

Si desea más información, puede ponerse en contacto con el Departamento de Comunicación de la Fundación BBVA (91 374 52 10 y 91 537 37 69 ó comunicacion@bbva.es) o consultar en la web www.fbbva.es